

El Estatuto y los mercaderes

MANUEL CAMPO VIDAL

PERO quién ha invitado a los catalanes a venir a la Moncloa para que pasen el día diciendo que se niegan?, habría exclamado el presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, en relación con eventuales negociaciones del Estatuto de Autonomía. Probablemente, nadie ha invitado de modo formal a los diputados y senadores catalanes a seguir el mismo camino de discusión que siguiera el Estatuto vasco. Pero sí es cierto que Adolfo Suárez trató de hallar en Josep Tarradellas un Carlos Garaicoechea, sin lograrlo, y cierto es también que la técnica de "aparcar" artículos del Estatuto catalán es el mejor sistema para terminar negociando en la Moncloa, como diría el diputado socialista Alfonso Guerra.

Que la discusión del Estatuto catalán va a ser un calvario, está fuera de toda duda, sin la excepcionalidad del caso vasco, que permitió disculpar el exceso de protagonismo de UCD y del Partido Nacionalista Vasco en la negociación, y presentados en Madrid los veintinueve de la comisión negociadora con un sólido bloque socialistas-comunistas-nacionalistas y con un cierto compromiso de los ucedistas catalanes a defender en medida prudente un proyecto de Estatuto que ellos mismos votaron. Adolfo Suárez se encuentra, en este caso, bastante solo para la discusión. De su parte se encuentra la UCD del resto de España, un Fraga que se cree como árbitro, pero que carece del apoyo del diputado Antoni de Senillosa, elegido en las listas de Coalición Democrática por Barcelona, y del diputado Blas Piñar, eterno voto negativo en materia estatutaria.

Una correlación de fuerzas tan ajustada, pero conocida desde semanas atrás y, en cualquier caso, confirmada con nuevos elementos, como el voto afirmativo de José María de Arellano en el Estatuto vasco, puso en marcha la

maquinaria ucedista para tratar de negociar el Estatuto catalán en mejores condiciones.

La primera fase de la operación fue publicar unos motivos de desacuerdo de UCD con el texto catalán, que más bien podían considerarse como enmienda a la totalidad redactada en base a una filosofía más propia del antiguo régimen que de éste. Es la vieja táctica de los tratantes de ganado: tirar bajo para luego ajustar.

La segunda parte de la operación fue buscar una fórmula para esquivar en lo posible a los veintinueve negociadores designados por la asamblea de parlamentarios catalanes que han acudido a las Cortes con un texto muy equilibrado y con el precioso capital de la unidad política, apenas sin fisuras, en torno al texto. Para ello se retrasó el viaje de Tarradellas a Madrid hasta el momento en que el presidente Suárez creyó oportuno y, una vez en la Moncloa, se propuso al viejo presidente catalán constituirse en negociador del Estatuto. Se negó Tarradellas, por entender con acierto que esa tarea correspondía a los parlamentarios catalanes, ante los que se hubiese colo-

cado en difíciles circunstancias de haber aceptado la propuesta. No trató Suárez de disimular, a partir de aquella negativa, que la presencia de Tarradellas en Madrid carecía para él de interés, y se enfadó, entre tanto, el máximo representante de la institución catalana en un torrente de visitas y audiencias para tratar de llenar de contenido un viaje que había quedado ya sentenciado.

La táctica ucedista consistió, desde aquel momento, en tratar de que la comisión, que el pasado viernes comenzó la discusión del Estatuto catalán, simplemente leyese y discutiese el articulado, pero todavía sin votar. Se negaron los catalanes; hubo de suspenderse la reunión, y Rodolfo Martín Villa, siempre en permanente contacto telefónico con la Moncloa, aceptó pasar a votación. Resultado: todos los artículos estudiados, excepto el cuarto, relativo a la bandera catalana, quedaron peligrosamente "aparcados" y pendientes de una segunda vuelta. Todas las condiciones apuntan a que la UCD trata de hacer paquetes para que en el mercado de la Moncloa o en las mismas Cortes, como quieren los catala-

nes, pero previo desplazamiento del feriante, se cambien unos por otros, o los otros por los unos.

Los problemas, por paquetes

Mientras llueven adhesiones de entidades y colegios profesionales, y los Ayuntamientos de Cataluña llenan sus fachadas con banderas y pancartas en las que se lee "Volem l'Estatut sense retallar" ("Queremos el Estatuto sin recortar"), un estudio del proyecto del Estatuto catalán advierte que las serias discrepancias entre el contenido del proyecto y la posición del Gobierno pueden resumirse en seis paquetes. En el primero, referente a la enseñanza, se considera en Cataluña que no ha quedado mal la formulación final del vasco, pero que no puede aceptarse una supe-ditación a las leyes generales que sobre enseñanza vayan elaborándose. "Sólo la Constitución puede ser límite del Estatuto, y a ella se debe sometimiento", comentó el secretario general del PSUC, Antoni Gutiérrez Díaz, a TRIUNFO. El segundo grupo de problemas gira en torno a la Hacienda. Sin voluntad alguna de insolidaridad con otras regiones menos favorecidas, Cataluña desea una Hacienda propia, y el diputado Ramón Trias Fargas está dispuesto a guerrear con números contra Fernández Ordóñez las horas necesarias.

El tercer problema grave afecta a la potestad legislativa del futuro Parlamento catalán. El Parlamento catalán, durante la República, elaboró Leyes como la municipal de 1934, que en su día se llegó a considerar como la más progresiva de Europa. Cataluña necesita ahora, para su planificación económica, para su reconstrucción, una capacidad legislativa muy alejada de la escuálida facultad que la UCD le reserva y que la asemejaría a la de los Consejos Regionales Italianos.



Tarradellas dijo no a Suárez.



Los veintún negociadores designados por la Asamblea de Parlamentarios para discutir en Madrid el Estatuto: el precioso capital de la unidad en torno al texto.

Sobre el cuarto problema, el de las Fuerzas de Orden Público, y sobre el quinto, relativo a la administración de la justicia, estarían dispuestas las fuerzas políticas catalanas a mostrar una flexibilidad importante en beneficio de la potestad legislativa, de la Hacienda y de la Enseñanza.

El conflicto surgirá, sin temor a error en la predicción, al discutirse la disposición transitoria que establece el sistema electoral para el Parlamento catalán. Motivo de intensos debates durante la elaboración del proyecto, donde no faltaron anticonstitucionales propuestas, como la de un Parlamento bicameral, sostenida por el entonces diputado Güell de Sentmenat, UCD va a tratar en este punto de prefigurar el futuro Parlamento primando el voto de las zonas agrarias para reducir el peso favorable a la izquierda de las zonas urbanas e industriales. En este punto, los diputados y senadores catalanes van a mantener la exigencia de que se respete la proporcionalidad para que el voto de un agricultor del valle de Arán no valga diez veces más que el de un obrero industrial de Sabadell, como pretendía la derecha catalana con una no disimulada complacencia de los seguidores de Jordi Pujol. ■

Una plataforma anti-OTAN

Se ha decidido la constitución de una "Plataforma amplia y abierta" contraria a la entrada de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a raíz de una reunión celebrada en Madrid por los promotores. Se ha creado un comité coordinador de cinco miembros, independientes políticamente, que ejercerá las funciones organizativas y propagandísticas en una primera etapa. El órgano decisorio de esta Plataforma será una asamblea, que funcionará con los grupos y las individualidades que apoyen esta iniciativa.

En el documento base de esta reunión primera se alude a que esta vinculación del Estado español con la OTAN "entraría en contradicción con los intereses generales de los pueblos de España... e impediría la evolución libre y democrática de las distintas nacionalidades y regiones". Se alude especialmente a la "incidencia en el archipiélago canario y en los pueblos africanos que luchan por su liberación nacional". Entre los grupos promotores de la Plataforma anti-OTAN figura el partido vasco EIA y la coalición Euskadiko Ezquerria, la Unión del Pueblo Canario, el Movimiento Comunista, la Liga Comunista Revolucionaria, el Partido del Trabajo (antes de la unificación con ORT), grupos ecologistas aragoneses, valencianos, murcianos y baleares y personalidades de la política (muchas de ellas a título individual, como es el caso de militantes del PSOE y del PCE), el arte, la literatura, etc. Figuran entre los

promotores algunos ex militares de la antigua UMD.

El manifiesto publicado, que recoge el trabajo ya desarrollado por algunas organizaciones no puramente políticas (Amigos de la Unesco, Derechos Humanos, Consejo de la Paz, etc.) describe la adecuación que el Gobierno está haciendo en todos los terrenos —y no sólo en el militar— para acomodar las actuales estructuras a los dispositivos militar, estratégico, económico, político y cultural de la OTAN. Pide, finalmente, un debate abierto y generalizado. La adhesión que esta Plataforma está experimentando es masiva, especialmente en los ambientes políticos y culturales periféricos del Estado, de donde ha partido la iniciativa, especialmente Cataluña, Euskadi y Canarias.

La primera misión que se le ha encomendado al comité coordinador ha sido la formación de un centro de documentación sobre la OTAN y la redacción de un libro, breve y asequible, que pueda ser difundido entre toda clase de públicos y en todos los medios políticos, sindicales, ciudadanos y ecologistas. Se estima que en el otoño, cuando las presiones para que España se adhiera a la OTAN vuelvan a recrudecerse, podrán organizarse actos públicos y manifestaciones anti-OTAN en todo el territorio del Estado, a fin de que la conciencia popular vaya informándose y pueda expresarse sobre este tema con conocimiento de causa. ■ PEDRO COSTA MORATA.